

SESIONES

DE LA

DIPUTACION PERMANENTE DE CORTES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. DIEGO MARTINEZ BARRIO

Sesión del viernes 15 de Octubre de 1937

SUMARIO

Abierta la sesión a las doce y quince minutos, se lee y aprueba el acta de la anterior.
Excusa de asistencia y adhesión a los acuerdos que se adopten: telegrama del Sr. Santaló.
Renuncia del cargo de Jurado parlamentario del Tribunal de Responsabilidades civiles del señor D. Maximiliano Martínez Moreno; designación de los Diputados D. José A. Junco Toral y D. Amancio Muñoz de Zafra para vocales del mismo Tribunal de Responsabilidades civiles; aplicación a los funcionarios del Tribunal de Cuentas de la República del decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 6 de Agosto último, y nombramiento del Sr. D. Juan Simeón Vidarte para ocupar el cargo de fiscal del Tribunal de Cuentas de la República: comunicaciones.—Preguntas y manifestaciones del Sr. Presidente.—Acuerdos aprobatorios.

ORDEN DEL DIA.—Suplicatorio para proceder contra el Diputado D. Modesto Gosálvez y Fuente Manresa: dictamen.—Intervenciones de los señores Jáuregui, Lamóneda, Velao y Corominas.—Rectificación del Sr. Jáuregui.—Intervención del Sr. Prat y propuesta relativa a la concesión de suplicatorio condicionado a que sea el Tribunal Supremo, en su Sala correspondiente, el que juzgue al Sr. Gosálvez.—Rectificaciones de los señores Corominas y Velao.—Manifestaciones del señor Presidente.—En votación nominal queda aprobado el dictamen.—Con el voto en contra del Sr. Corominas se aprueba la propuesta de que la Sala competente del Tribunal Supremo juzgue al Sr. Gosálvez.

Prórroga del estado de alarma: comunicación.—Acuerdo.

Se levanta la sesión a la una y quince minutos de la tarde.

Abierta la sesión a las doce y quince minutos, en segunda convocatoria, con asistencia de los señores Velao, Palomo, Pérez Urria, Tejero, Jáuregui, Valentín, Lamóneda, Prat, González Peña, Pascual Leone, Corominas y Torres Campaña, se leyó y fué aprobada el acta de la anterior.

Se dió cuenta de un telegrama del Sr. Santaló excusando su asistencia y adhiriéndose a los acuerdos que se adopten.

Leída una comunicación del Sr. Diputado don Maximiliano Martínez Moreno, en la que presenta su renuncia del cargo de Jurado parlamentario del Tribunal de Responsabilidades civiles por encontrarse en la imposibilidad de atenderlo debidamente, dijo

El Sr. PRESIDENTE: ¿Se acepta la renuncia

presentada por el Sr. Martínez Moreno? (**Asentimiento.**) Queda aceptada."

Leída asimismo otra comunicación de la minoría parlamentaria socialista designando para que la representen en el Tribunal de Responsabilidades civiles a los Diputados D. José A. Junco Toral, como vocal propietario, y D. Amancio Muñoz de Zafra como suplente, en sustitución de los Sres. Galarza y Díaz Castro, respectivamente, dijo

El Sr. PRESIDENTE: ¿Se aprueba así? (**Asentimiento.**) Así queda aprobado.

Se dará cuenta al Tribunal de Responsabilidades civiles a los efectos consiguientes."

Leída seguidamente una comunicación de la Comisión permanente del Tribunal de Cuentas pi-

diendo a la Cámara o a la Diputación permanente, en su caso, se entienda que el decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 6 de Agosto último sea de aplicación a los funcionarios del Tribunal de Cuentas de la República, dijo:

El Sr. **PRESIDENTE**: ¿Se aprueba? (**Asentimiento.**) Queda aprobado."

Leída a continuación otra comunicación de la Comisión del Tribunal de Cuentas trasladando el acuerdo adoptado por la misma, en el que se propone a D. Juan Simeón Vidarte para ocupar el cargo de fiscal del mencionado organismo, dijo:

El Sr. **PRESIDENTE**: Como acaban de oír los Sres. Diputados, la propuesta de la Comisión del Tribunal de Cuentas elevada a las Cortes, en este caso concreto a la Diputación permanente, es la de que D. Juan Simeón Vidarte sea nombrado fiscal de dicho Alto Cuerpo. ¿Algún Sr. Diputado desea hacer uso de la palabra? (**Pausa.**) ¿Se aprueba? (**Asentimiento.**) Queda aprobada."

ORDEN DEL DIA

Leído el dictamen de la Comisión de suplicatorios concediendo el solicitado por el Juzgado instructor número 4 de los Jurados Populares de Urgencia, de Madrid, para proceder contra el Diputado D. Modesto Gosálvez y Fuente Manresa, dijo

El Sr. **PRESIDENTE**: Se abre discusión.

El Sr. **JAUREGUI**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **JAUREGUI**: En las últimas reuniones de la Comisión de suplicatorios se planteó la cuestión relativa a la demanda del juez instructor del Tribunal de Urgencia número 4, de Madrid, recabando del Parlamento la autorización para procesar al Diputado Sr. Gosálvez. El Tribunal que le demandaba era, por así decirlo, el Jurado de Urgencia, en funciones de juez instructor del propio Juzgado, y pedía la concesión del suplicatorio para procesar a este Sr. Diputado, con arreglo a la ley de Tribunales de Urgencia, que establece el nuevo delito de desafección al Régimen.

La Comisión de suplicatorios celebró dos sesiones, cuyo desarrollo creo conveniente que conozcan los Sres. Diputados. En la primera, el señor Baeza Medina, presidente de la Comisión; el representante de Izquierda Republicana, Sr. Vargas; el representante de Esquerra Catalana, Sr. Jené, y el Diputado que os dirige la palabra, como representante del grupo vasco, opinamos unánimemente que no procedía conceder el suplicatorio pedido por entender que se trataba de un caso evidente y claro de denegación. El representante del grupo socialista también venía a opinar de esta suerte, pero estimaba que convenía tener una mayor información que la que se desprendía de los antecedentes remitidos por el juez, y pedía que se oyera a los Diputados por Cuenca del Frente Popular. Se oyó a los Diputados por Cuenca, y éstos, en general, sosteniendo la opinión de que se trataba de un sujeto no peligroso desde el punto de vista políticomilitar, estimaban que, en efecto, pertenecía a ese núcleo de Diputados de significa-

ción derechista de la política antigua de Cuenca, y así le consideraban desafecto al Régimen. Esta información de los Diputados por Cuenca hizo cambiar la opinión de la mayoría de los miembros de la Comisión, sustentando el representante de Esquerra Catalana y yo el criterio de que estábamos ante un caso de evidente denegación del suplicatorio.

Como me parece conveniente que los conozcan los Sres. Diputados que forman la Diputación permanente, voy a dar lectura de los antecedentes que ha remitido el juez. Hay una certificación expedida por el juez instructor, que dice:

"En Madrid a las trece horas treinta minutos del día 17 de Julio de 1937 comparecen los agentes ... presentando a los que dicen llamarse Modesto Gosálvez F. Manresa ..., por ser el primero de los citados un conocido político de derechas ... El Modesto Gosálvez fué Diputado de las Constituyentes por Cuenca, reelegido en las de 1934, y asimismo en las de 1936, en el mes de Febrero, siempre por la misma circunscripción, formando parte esta última vez de la candidatura de Casanueva, Goicoechea, Fanjul y otros. Como estas elecciones fueron anuladas, al volverse a celebrar entró en la candidatura de Goicoechea, Casanueva y Primo de Rivera, siendo el detenido Gosálvez nombrado Diputado esta última vez. Figura asimismo informe de la Policía en el que dice que "Modesto Gosálvez F. Manresa es un político de derechas, ya que integraba candidatura por la circunscripción de Cuenca, de Fanjul, Goicoechea y Primo de Rivera. También de su declaración se desprende que gestionaba hacer un viaje a Valencia para conseguir del Congreso o de alguno de sus Diputados un pasaporte para marchar a Inglaterra, quedando así bien claro que dicho viaje no era para hacer acto de presencia en las sesiones y colaborar en la función legislativa, sino que, como queda dicho, únicamente era medio para querer marchar al extranjero". Igualmente figura telegrama del gobernador civil de Cuenca al presidente Jurado Urgencia núm. 4, en el que, refiriéndose al inculpado, dice: "... Fué Diputado monárquico esta provincia, considerándole elemento peligroso y dirigente principal aquella política en ésta."

Esto es todo lo que el atestado de la Policía contiene.

Hay también entre los antecedentes una carta que el Sr. Gosálvez dirigió al Sr. Presidente de la Cámara, que dice así:

"Madrid, 23 de Septiembre de 1937.—Excelentísimo Sr. D. Diego Martínez Barrio, Presidente de las Cortes.—Valencia.

Mi distinguido amigo y Presidente: Correspondo a su muy atenta carta del 14, y he recibido la visita del presidente de la Comisión de suplicatorios D. Emilio Baeza Medina, que me atendió con la mayor cortesía y deferencia, por lo que testimonio mi agradecimiento a la representación del Parlamento.

Espero de su atención haga saber a la Comisión de suplicatorios de la Cámara las siguientes afirmaciones:

do en absoluto, y para confirmar que, efectivamente, el Sr. Velao, al expresar su opinión, ha interpretado con exactitud un segundo problema, que había de plantearse si se concediera el suplicatorio: el de procedimiento. Desde luego, estoy completamente de acuerdo respecto a la competencia del Tribunal Supremo. **(El Sr. Prat pide la palabra).**

Es una pena para la gente joven, para los que por nuestros años no hemos recibido aún desengaños de la vida, advertir cómo cambian las opiniones en España a medida que cambian las situaciones políticas. Estos días, con una preocupación de acierto, y sólo con esta preocupación, he examinado los debates que sobre suplicatorios se desarrollaron en las legislaturas pasadas desde el advenimiento de la República, y después de ello he llegado a la convicción de que las opiniones cambian según varían los Gobiernos. Durante el año 33 la opinión sustentada por el Sr. González y Fernández de la Bandera era exactamente la misma que la que mantenían todas las derechas españolas. Cuando después del mes de Octubre cayó sobre las Cortes aquella lluvia de suplicatorios, la opinión de las derechas españolas era la misma exactamente que se ha sustentado aquí. Es decir, que nosotros, la Cámara, no entra en el estudio del asunto; no quiere impedir la acción de los Tribunales; respeta todas las consideraciones, pero concede el suplicatorio. Entonces la opinión de los grupos Socialista y de Frente Popular era exactamente la misma que hoy estoy sosteniendo. No hay sino examinar aquellos debates. Solamente había un grupo que tenía una opinión en el año 34 y la sostiene ahora: el Nacionalista vasco. Examinadas las intervenciones de quienes el año 34 formaban el grupo Nacionalista vasco, se advierte que sustentaban exactamente la misma opinión. Entonces hubimos de defender, porque la política española cambiaba, a los Diputados socialistas y comunistas, y los Sres. Horn y Careaga sostuvieron verdaderas batallas en todos los debates defendiendo el fuero parlamentario de los Sres. Diputados contra quienes se pedía el suplicatorio por realización de actos de rebelión que se habían producido. En la actualidad han cambiado las cosas y nos encontramos con un Diputado que se pide para procesar a un Diputado, no por rebelión ni por auxilio a la rebelión, sino por su simple desafeción al Régimen, por su ideología política; pero nosotros seguimos manteniendo la misma teoría que entonces; mucho más ahora cuando vamos a sentar un precedente, que cualquiera que sea el cambio de la política española, va a producir la inestabilidad de todos los señores Diputados. Porque, además, debe tenerse en cuenta que han pasado dieciséis meses de guerra, que pudo haber apreciaciones ideológicas al principio de ella que no estuvieran conformes, no con el Régimen, sino con ciertas actitudes o sistemas de Gobierno o con un Gobierno determinado, y que había muchos grupos, que hoy figuran en el Gobierno, que no se hallaban de acuerdo con aquel estado de cosas y, concretamente, con aquel Régimen. Prueba de ello es que los Gobier-

nos han cambiado y se ha alterado todo un sistema. Y yo pregunto: unas actitudes adoptadas al estallar la revolución por unas personas que se limitan a refugiarse en una Embajada, ¿van a dar lugar—y este es el único delito—a que ese hecho se considere como un acto de hostilidad? Entonces habría que procesar a muchos Sres. Diputados, alguno de los cuales quizá se refugiaron en Embajadas, en un puerto o en un bosque. No sé qué diferencia hay entre un bosque, un puerto o una Embajada.

Las cosas han cambiado. Hoy estamos ante una situación, ante un régimen y el Sr. Diputado contra quien se pide el suplicatorio se declara afecto a él, contrario a la subversión; la condena ante un compañero del Congreso de los Diputados. ¿Acaso vamos a seguir una política de separación, de exclusión, cuando toda nuestra política tiene que ser de atracción? Y no solamente cuando se trata de un Diputado, sino de muchos ciudadanos españoles que, quizá, en los primeros días o meses del movimiento no estuvieron con la República, pero que hoy—cuando el transcurso del tiempo ha constatado los sistemas y las conductas de una y otra parte—, si no con una afección extraordinaria y perfecta, se han inclinado a favor del régimen republicano.

Repito que esto me parece una enormidad. Lo digo sinceramente. Un cambio de manera de pensar a medida que cambian los Gobiernos repugna a mis pocos años. Yo sigo la tradición del Sr. Horn, aquel venerable caballero que en Octubre defendió con todo entusiasmo la inviolabilidad de los Diputados a Cortes, y con mi voz, muy modesta, el grupo Vasco sigue defendiendo, no los privilegios, pero sí el derecho de un Diputado a no ser procesado simplemente por sus ideas políticas, y no solamente por esto, sino por ser un Diputado que figura como independiente, no adscrito a partidos que se hayan levantado contra el Régimen. ¿A dónde vamos si seguimos por este camino? Si a un Diputado que se excluye positiva y deliberadamente de los partidos que se rebelaron contra el Régimen lo consideramos, o pretendemos considerarlo, como desafecto al Régimen, yo no sé, si el día de mañana cambian las cosas o los Gobiernos continúan sucediéndose en una u otra forma, en derechas o en izquierdas, si los grupos que no estén conformes con la actuación del Gobierno habrán de considerarse también desafectos y sometidos al primer proceso que se presente. Nosotros no queremos contraer hoy la responsabilidad de haber accedido a la concesión de un suplicatorio para proceder contra un Diputado por sus ideas políticas, porque con ello echaríamos abajo la misma institución parlamentaria.

El Sr. PRAT: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. PRAT: Realmente han pesado mucho en mi ánimo las consideraciones de los Sres. Jáuregui y Corominas, pero quisiera hacer rápidamente unas observaciones sobre ellas. El de desafeción al Régimen es un delito inconcebible, no sólo

para un Diputado, sino para cualquier ciudadano, porque roza un poco el derecho de la libertad de pensamiento que la propia Constitución establece, y es cosa inherente a todos los estados de derecho. Pero los tiempos son muy distintos: es la institución parlamentaria, es la institución democrática la que está siendo combatida, no con discursos, no con actos políticos, sino con una guerra civil, con una guerra internacional que dura ya casi año y medio y que supone dolores, derramamiento enorme de sangre y la destrucción de España.

¿Son estas las circunstancias que se daban antes del 16 de Julio del 36 para advertir la inconsecuencia en la opinión de los grupos hoy mayoritarios en las Cortes españolas? ¿Es exactamente la misma situación en que se solicitaban los suplicatorios posteriores a 1934 que la de los actuales? Tan no es así, que el establecimiento del delito de desafección al Régimen, elevado al rango de ley por ratificación parlamentaria, significa, más que una persecución del individuo por sus ideas políticas, una protección para él, puesto que va a ser juzgado por Tribunales responsables, no quedando, por consiguiente, entregado a la espontánea y atroz explosión de la venganza popular. Este delito existe para todos. Si fuera una sola cosa de opinión la que nos llevase a conceder el suplicatorio de un Diputado a Cortes, podríamos mantener a ultranza el fuero parlamentario, incluso cerrando los ojos a una realidad que todavía se mantiene en los campos de batalla.

Pero no es eso sólo. Es que un Diputado, en esos momentos de drama para su país, tiene quizá la obligación de atender a su seguridad personal. Pero existe para él otra obligación superior: la de actuar como Diputado a Cortes; la de, con todo peligro para su vida, ir al Parlamento a defender los puntos de vista que dentro de su ideología crea más sanos para la defensa de su país y a exteriorizar al menos su adhesión a la institución constitucional parlamentaria. Y el 1 de Octubre, el Sr. Gosálvez, que podía, con la máxima seguridad personal, desde ese exceso de extraterritorialidad que ha sido el asilo de las Embajadas, enviar su adhesión a la institución de la República democrática española y a las Cortes, no mandó ni siquiera unas líneas de adhesión a esta República.

Voy a dejar aparte toda la actuación anterior en la provincia de Cuenca del Diputado Sr. Gosálvez; pero este hecho sí quiero remarcarlo. Por lo demás, nosotros, que distinguimos los tiempos para concordar los derechos, no seguimos la línea política de las derechas al hacer estas manifestaciones. Cuando las derechas autorizaron los suplicatorios, en 1934, contra los Diputados a Cortes perseguidos, entregaron a éstos a Tribunales notoriamente incompetentes. Nosotros no vamos a hacer eso. Si la proposición que voy a hacer a la Diputación permanente es aceptada—yo creo que las Cortes, en definitiva, pueden hacerlo, puesto que tienen soberanía indudable—, deberá concederse el suplicatorio, condicionado a que sea el Tribunal Supremo, en su Sala correspondiente, el que juzgue al Sr. Gosálvez. Con esta

garantía podemos dejar expedita la acción de la Justicia, que no es una acción de la Justicia en tiempos normales y pacíficos, sino algo más profundo: la acción de la Justicia de un pueblo que se encuentra atacado en su propia esencia."

Concedida la palabra para rectificar, el señor Lamonedá, que renuncia a hacer uso de ella, dijo:

El Sr. **COROMINAS**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S. para rectificar.

El Sr. **COROMINAS**: Siento no poder adherirme al pensamiento del Sr. Prat y tener que ratificarme en lo que antes expuse. Incluso la interpretación literal de esa ley en que se define la desafección al Régimen, no se refiere nunca a que se tenga tal o cual ideología; y siempre que se quiere ocupar de casos de desafección al Régimen, se refiere a actos, nunca a ideas; desafección al Régimen comprobada por actos realizados, etcétera. Esta es la frase que sale en todas partes. Y cuando se va a concretar esto se dice si es por subsistencias o por qué cosa; pero siempre por actos.

Y yo digo: aquí no existe acusación; aquí nadie ha acusado a este señor hasta ahora de algo que sea un delito. La desafección al Régimen, hasta ahora, nadie la ha definido como delito. La desafección al Régimen ha de ser por actos, no por ideas. Nos encontramos, pues, con un procedimiento judicial entablado simplemente por ideas, y yo, que soy un viejo republicano y que toda la vida he luchado por la libertad de pensamiento, me resisto—hay algo en mí que no son ideas, que son sentimientos, que es una repugnancia que me impide proceder de otro modo—a votar por que se procese a un hombre cuando no se le ha acusado por actos, sino solamente por ideas.

El Sr. **VELAO**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S. para rectificar.

El Sr. **VELAO**: Oídas las manifestaciones del Sr. Corominas, me creo en el deber de decir que nos encontramos ante un dictamen de la Comisión de suplicatorios y, aunque sea molestando una vez más a la Diputación, insisto en mi punto de vista.

El hecho de que la Comisión de suplicatorios, después de oír manifestaciones cuyo fondo desde luego reconozco que ignoro, haya acordado dejar libre la acción de la Justicia, unido a las razones elocuentemente expuestas por el Sr. Prat, con las cuales estoy completamente conforme en relación a la modalidad que los tiempos revolucionarios imponen a la institución parlamentaria, nos obliga, a mi juicio, a sostener el dictamen de la Comisión de suplicatorios y a adherirnos a la propuesta del señor Prat de que el Sr. Gosálvez sea juzgado por la Sala correspondiente del Tribunal Supremo.

El Sr. **PRESIDENTE**: Se va a proceder a la votación nominal del dictamen, dejando para una segunda votación la propuesta relativa a condicionar la concesión del suplicatorio, si fuera la votación afirmativa, al hecho de que sea juzgado el se-

ñor Gosálvez por la Sala competente del Tribunal Supremo.”

Verificada la votación, fué aprobado el dictamen por 11 votos de los Sres. Velao, Pascual Leone, Palomo, Tejero, Pérez Urria, Valentín, Lamonedá, Prat, González Peña, Torres Campaña y Presidente, contra dos, de los Sres. Jáuregui y Corominas.

El Sr. **PRESIDENTE**: Se va a proceder a votar sobre si la concesión de suplicatorio que acaba de hacerse para procesar al Sr. Gosálvez queda condicionada a que sea juzgado por la Sala competente del Tribunal Supremo.

El Sr. **COROMINAS**: Pido que se haga constar mi voto en contra, porque ni ante el Tribunal Supremo creo que deba juzgarse a un Diputado por desafección ideológica al Régimen.

El Sr. **PRESIDENTE**: Se hará constar el voto en contra del Sr. Corominas por la razón que acaba de exponer.

¿Se aprueba la proposición? (**Pausa.**) Queda aprobada.”

Se leyó a continuación la siguiente comunicación:

“Excmo. Sr.: Considerando necesario el Gobierno prorrogar por treinta días más el estado de alarma que se declaró en 17 de Febrero de 1936 en todo el territorio nacional y plazas de soberanía, Ceuta y Melilla, con sujeción a lo preceptuado en la vigente ley de Orden público, tengo el honor de ponerlo en conocimiento de V. E. a los efectos de la autorización prevenida en el artículo 42 de la Constitución.

Valencia, 12 de Octubre de 1937.—J. Negrín.”

El Sr. **PRESIDENTE**: Se concede la palabra sobre la comunicación que acaba de leerse. (**Pausa.**) ¿Se aprueba la prórroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno? (**Asentimiento.**) Queda aprobada.

No habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión.

Era la una y quince minutos de la tarde.

Rivadeneira, S. A. (Intervenido por el Estado).
Paseo de San Vicente, 28.—Madrid.

1.^a Que en todo momento, desde que ingresé en la Embajada de Chile, para evitar ser víctima de la actuación de cualquier grupo de incontrolados, ya que como Diputado independiente no podía alegar pertenecer a ningún partido del Frente Popular, no he podido practicar ninguna actividad contraria al Régimen, pues cuando he salido ha sido para acudir al Palacio del Congreso, donde me han sido abonadas las dietas correspondientes, y he mantenido conversaciones con el oficial Mayor accidental, lo que revela que no me he ocultado en ningún momento, y que para cuanto he necesitado encontré siempre la atención de dicho funcionario.

2.^a Que el informe del gobernador de Albacete, D. José Cazorla, es absurdo cuando afirma que soy monárquico, por la sencilla razón de que siempre que he sido Diputado a Cortes lo fui por la provincia de Cuenca y con el carácter de independiente, y, por lo tanto, en esa provincia de Albacete no he tenido que hacer propaganda de ninguna clase, siendo parcial el referido informe por haber sido precisamente ese señor el que, siendo delegado de Orden público, acordó en el pasado mes de Marzo mi detención, siendo puesto en libertad por la mediación afortunada en aquella ocasión de usted, que, velando por los prestigios del Parlamento y de la inmunidad de sus representantes, la consiguió.

3.^a Que jamás en mis propagandas electorales he tenido que hacer propaganda monárquica, por la sencilla razón de que, presentándome independiente, no tenía para nada que aludir a la defensa de ideales monárquicos.

4.^a Que confío en la ecuanimidad de la Comisión de suplicatorios al resolver mi caso, porque los Tribunales de Justicia ordinarios no pueden enjuiciar a un Diputado a Cortes, y menos los Juzgados de Urgencia, que juzgan a desafectos al Régimen, pues de seguir ese criterio, quedaría el prestigio e inmunidad del Parlamento a disposición de la Autoridad gubernativa, y sería una intromisión en el Poder legislativo, y en mi caso concreto sería tanto como inutilizar a quien con su independencia absoluta y por voluntad popular se sienta en la Cámara sin pertenecer a ningún bando contendiente.

5.^a Que yo no admito las subversiones contra el Gobierno legítimamente constituido. Que admiro, porque me educó en Suiza, la forma democrática republicana, como considero no es despreciable la forma de monarquía en el sentido liberal de la noble nación belga, donde ha colaborado en sus Gobiernos el partido socialista.

Con estas ampliaciones y en la seguridad de que serán respetados por la Comisión de suplicatorios los preceptos constitucionales comprendidos en los artículos de ésta, de la ley de 1912 y del Reglamento de la Cámara, quedo, con el mucho gusto de siempre, de usted atento reconocido amigo y compañero q. e. s. m., Modesto Gosálvez."

Y después hay una declaración prestada por el mismo Sr. Gosálvez ante el presidente de la Comisión de suplicatorios, que dice así:

"En Madrid a 15 de Septiembre de 1937:

Constituido en la prisión de San Antón el presidente accidental de la Comisión de suplicatorios con el que suscribe, compareció ante ambos el Diputado a Cortes D. Modesto Gosálvez F. y Manresa, quien, preguntado, manifiesta que fué elegido Diputado a Cortes por la circunscripción de Cuenca en las elecciones de Febrero de 1936, y posteriormente en las que se verificaron con motivo de la anulación de aquéllas con el carácter de independiente, hasta el punto de que yendo en coalición con los partidos políticos Renovación Española, Acción Popular y Radical, junto al nombre suyo se hacía constar dicha condición de independiente. Que ni en las Cortes ni fuera de ellas tuvo actuación con anterioridad al 17 de Julio relacionada con la de los grupos o personas que han tomado parte en el movimiento subversivo; y producido dicho movimiento, del que no estaba enterado, se trasladó desde una finca de su padre, de la provincia de Cuenca, en término municipal de Casas de Benítez, a Madrid, a su domicilio de Príncipe de Vergara, número 9, entresuelo; recordando que precisamente hizo eso el día 20 de Julio del año pasado. Que estuvo en su casa unos días, saliendo durante ellos a la calle; pero ante la situación de entonces y los actos de violencia que se cometían, aconsejado también por algunos amigos por el riesgo que pudiera correr, entró en la Embajada de Chile, después de haber pasado varios días en distintas pensiones. Que como consideraba que no estaba sujeto a responsabilidad ninguna, y si se había refugiado en la Embajada de Chile era como medida de seguridad, salió de ella en algunas ocasiones, y en una de las veces, el 7 de Marzo, fué detenido en la calle por la Policía al entrar en la Embajada, siendo trasladado a la Dirección de Seguridad, donde permaneció cuarenta y tres días, poniéndosele en libertad mediante aval que prestó el partido Sindicalista, pero sin que se estimara que estuviese incurso en delito alguno, y por ello no se le puso a disposición de ningún Tribunal. Que continuó saliendo, y el 17 de Julio, como tuvo noticias de que las Cortes iban a abrirse, aunque de manera vaga, acudió al Palacio del Congreso y visitó al oficial Mayor accidental D. José Bezares, preguntándole por las posibilidades de ir a Valencia y garantías que podrían ofrecérsele para no ser molestado, y que después de efectuar algunas compras y disponerse a ir a la Embajada, fué detenido por la Policía, que lo ingresó en la Dirección de Seguridad, y a los dos días a la prisión de San Antón, poniéndosele a la disposición del Jurado de Urgencia número 4.

A nuevas preguntas del Sr. Baeza Medina, manifestó que tanto en las elecciones de 1931 como en las de 1933, figuró también como independiente, si bien en las primeras se hacía constar que iba como liberal agrario y se adscribió a la minoría Agraria que actuó en las Cortes Constituyentes; pero en las segundas Cortes figuró como en las actuales, en la minoría que se forma con los que tienen el carácter de independientes, debiendo puntualizar que en estas

Cortes, no obstante figurar en grupo de independientes de derecha, él no formaba parte de él, sino en el de carácter general, donde aparecían acoplados Diputados de significado carácter izquierdista. Que invocó su condición de Diputado con exhibición del carnet al ser detenido por la Policía y después cuando se le tomó declaración, sin que ésta se tomara en consideración. Que no ha militado en Acción Popular ni en ningún partido político, por lo que no comprende cómo puede tildársele de monárquico. Que ha mantenido de antiguo relaciones de amistad y trato constante con el Diputado de Unión Republicana, y antes Radical Socialista, D. Francisco López de Goicoechea, quien podrá decir, por conocer íntimamente su pensamiento, cómo no ha sido nunca monárquico. Que siendo partidario del sistema constitucional, no debe considerársele enemigo del Gobierno, y no es partidario de casos de subversión en contra del mismo."

Esta es la declaración que ante el presidente de la Comisión de suplicatorios formula el Sr. Gosálvez, y éstos todos los antecedentes que tiene la Diputación permanente para decidir sobre si se ha de acceder a la petición de suplicatorio que se le dirige por el juez del Tribunal de Urgencia de Madrid.

La actuación del Sr. Gosálvez, como queda demostrado con la simple lectura de los antecedentes, es, en el orden de su significación como Diputado, perfectamente clara: este hombre es de indudable significación política derechista; de esa política derechista tradicional española que hace que un Diputado pueda salir triunfante durante años y años por la misma circunscripción con carácter y en candidatura de independiente. El Sr. Gosálvez se presenta en tres elecciones consecutivas con esa condición y en candidatura de independiente, y en las últimas, verificadas en 1936, figura en una candidatura conjunta con elementos de significación monárquica. Al discutirse en las Cortes las actas de la provincia de Cuenca, relativas a esas últimas elecciones, quedan anuladas las referentes a los Diputados de significación monárquica y con derecho a presentarse en la segunda vuelta dos candidatos independientes: los Sres. Álvarez Mendizábal y Gosálvez. Y estos dos señores, en la segunda vuelta, obtienen por la minoría, a la vez que la mayoría la consigue la candidatura del Frente Popular, el acta de Diputado.

Primera manifestación: que en Cuenca sale derrotado el grupo monárquico y resultan elegidos Diputados a Cortes los Sres. Gosálvez y Álvarez Mendizábal. El Sr. Gosálvez se presenta en el Parlamento, y mucho antes de producirse una revolución, cuando su declaración tiene una autenticidad indiscutible, hace su filiación de Diputado. Y entonces no se adscribe ni al grupo agrario ni al monárquico, ni al de Renovación ni al de los tradicionalistas, sino al de independientes. Y con esta característica (y esto obra en una certificación de la Secretaría del Congreso y en la distribución de grupos que figura en la lista de Diputados a Cortes de 1936) hay dos grupos de Diputados inde-

pendientes: uno, de independientes de derecha, y otro, de independientes a secas. El Sr. Gosálvez ni siquiera se adscribe al grupo de independientes de derecha; se adscribe al de independientes a secas, donde figuran D. Alvaro de Albornoz, Álvarez Mendizábal, con quien obtuvo el acta en su circunscripción; Berjano Gómez, Calderón Rojo, Cornide Quiroga, etc.

Este es todo su antecedente como Diputado a Cortes hasta el instante de estallar la sublevación militar. Con posterioridad a él no hay en el breve atestado de la Policía ningún hecho, ningún indicio de actuación que revele en él una desafección hostil al régimen republicano. Para los que conocimos el Madrid de entonces, el simple hecho de haberse escondido en una Embajada en aquellos primeros días no puede revelar una actuación de desafección hostil. Además, estimo que la desafección puede ser apreciada de dos maneras: como desafección ideológica de sistemas políticos, de estructuración en detalles y en esencia, y como desafección en el sentido de que se pretende y desea destruir el sistema adverso mediante el empleo de la fuerza, de la violencia.

Con estos antecedentes creo que se cometería una verdadera injusticia, un acto verdaderamente impolítico y se echaría por tierra la institución parlamentaria si aceptáramos el dictamen de la Comisión de suplicatorios. La ley que se le pretende juzgar es la que regula los Tribunales de Urgencia y establece una serie de hechos que constituyen delitos de desafección al Régimen. En realidad, de verdad no son delitos en el sentido jurídico de la palabra; son situaciones gubernativas en tiempos de guerra que tienen carácter de delito, porque aparecen en la ley y porque las examinan los Tribunales de Justicia. Son una serie de hechos, de actos concretos (destrucción de alimentos, manifestaciones, declaraciones deprimentes, etc.), y en la ley hay un capítulo que dice expresamente lo siguiente: "Se considerarán desafección al Régimen: ... Apartado c). Observar una conducta que, sin ser constitutiva de delito, demuestre, por sus antecedentes y móviles, que quien la practica es persona desafección al Régimen." Este precepto y la inmunidad parlamentaria están en contraposición, respecto de la cual hay que decidirse en un sentido u otro.

Y llegamos precisamente al aspecto de la inviolabilidad parlamentaria. Admito que se conceda el suplicatorio para juzgar a un Diputado por un acto de rebelión o de auxilio a la rebelión; pero que no me cabe en la cabeza, mientras sustento el concepto que tengo de la investidura parlamentaria, es que un Diputado pueda cometer un delito de desafección a que se refiere la ley. Porque son dos cosas completamente contrarias. La inmunidad parlamentaria tiende, fundamentalmente, a amparar al Diputado por razón de sus ideas, para que no se vea envuelto en un proceso, en una persecución gubernativa o judicial solo por sus ideas políticas. Así, cuando se ve que el elemento determinante del procesamiento es la idea política del Diputado, la inmunidad parlamentaria le asiste y la Cámara plenamente le am-

para contra el Poder, contra el Gobierno que quiere apoyarse en sus órganos judiciales o gubernativos para perseguirle por sus meras ideas políticas. Y, naturalmente, la inmunidad está siempre en defensa del Diputado contra los órganos del Poder, no contra sus conciudadanos, jugando ordinariamente cuando el Diputado perseguido es de distinta ideología política de la que profesan los que sostienen al Gobierno. Por consiguiente, si el único motivo—porque no hay ningún otro, ni siquiera indicios de realización de hechos de hostilidad al Régimen por los que se pudiera procesar al Sr. Gosálvez—es la ideología del Diputado, estimo que la Cámara no puede admitir que a uno de sus miembros se le procese por un Jurado de Urgencia por su ideología política, porque entonces echamos por tierra todo el sistema parlamentario, todo lo que es esencial y constituye una de las bases de la lucha que sostenemos. En consecuencia, existiendo incompatibilidad entre el delito de desafección por mera ideología que pueda cometer un Diputado, cosa que no es posible, y la inviolabilidad parlamentaria, nosotros debemos decidimos por esta última. En segundo término, no existiendo ningún hecho ni indicios que demuestren la realización de actos que prueben una manifiesta resafección al Régimen, nosotros no podemos autorizar que un Diputado que se cataloga de independiente a secas pueda ser sometido a un mero Jurado de Urgencia y ser procesado por desafección al Régimen.

Independiente de estas razones, hay otra también política. Nosotros no podemos incurrir en la lamentable equivocación de autorizar la persecución de un Diputado independiente después del espectáculo admirable de amplia tolerancia que ha ofrecido la República en las últimas sesiones de Cortes; admirable, no sólo por el tono de los debates que se han producido, sino por la presencia de Diputados independientes, incluso contrarios, desafectos al Gobierno del Frente Popular. La realidad es que uno de los Diputados que hizo uso de la palabra manifestó que no venía a prestar su confianza al Gobierno del Frente Popular.

Estimo, por consiguiente, que la Diputación permanente debe desestimar el dictamen de la Comisión de suplicatorios.

El Sr. **LAMONEDA**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **LAMONEDA**: Nos hallamos ante un dictamen, para emitir el cual la Comisión ha procedido con la natural prudencia, habiendo querido que antes de formularlo se hubiesen aportado aquellos testimonios que fueran indicios de la personalidad y de los actos posibles realizados por el Sr. Gosálvez. Nosotros no podemos examinar el problema de la concesión de un suplicatorio como si las Cortes funcionasen en una situación normal. Se trata de que los Tribunales determinen si el señor Gosálvez es una persona desafección al Régimen y, además, si esa desafección se ha traducido en algún acto de ataque o de falta de auxilio al mismo.

Es indudable que nos encontramos ante un dictamen que no señala hechos, pero sí indicios sufi-

cientes para suponer que, acaso, mediante la práctica de una investigación judicial más profunda, se puedan encontrar motivos de desafección al Régimen por parte de este señor Diputado; indicios como el de que el Sr. Gosálvez se refugió en una Embajada. El Sr. Gosálvez es un independiente a secas, no derechista; es amigo del Sr. López de Goicoechea y puede tener incluso el aval de un partido político como el Sindicalista. Si el Sr. Gosálvez no tenía que temer nada del Régimen, ¿por qué se ocultó? Puede decirse, y se ha dicho, que el Sr. Gosálvez se ocultó porque entonces en Madrid no había control para la gente que quería realizar actos de venganza; pero no se le ocurre al Sr. Gosálvez acudir a que le ampare el Presidente de las Cortes, a refugiarse en la Cámara, a hacer manifestaciones inmediatas de condenación, por su parte, del movimiento subversivo, sino que toma una medida precautoria para su seguridad personal, medida que le falla y que de no haberle fallado, no sabemos si el Sr. Gosálvez, una vez dominada la situación de orden público, hubiese aparecido en la Cámara o en el extranjero. Y como no se trata de que nosotros vayamos a acusarle, sino de dar a los Tribunales Populares la posibilidad de proclamar la inocencia de este señor Diputado, creo que la Diputación permanente no debe oponerse a que esto se verifique. Si es así, el Sr. Gosálvez podrá probarlo en una investigación más a fondo y nada tendríamos que oponer al fallo absoluto; pero negarnos, después de los testimonios de los parlamentarios de Cuenca y de los antecedentes de un señor que va a la lucha electoral con gente como Fanjul y Primo de Rivera, es contraer una responsabilidad política, y ésa no la queremos contraer y pedimos, por consiguiente, a la Diputación permanente que vote el dictamen.

El Sr. **VELAO**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **VELAO**: En el relato que nos ha hecho el Sr. Jáuregui ha esbozado la tramitación llevada a cabo por la Comisión de suplicatorios, que después no ha explicado, y que yo hubiera deseado ver explicada. El Sr. Jáuregui ha manifestado que la Comisión de suplicatorios, ante el examen que estaba haciendo del caso, consideró conveniente requerir la opinión de los Diputados del Frente Popular por la provincia de Cuenca, a la que representa en Cortes el Sr. Gosálvez. Y, naturalmente, hubiera aportado un poco más de luz a esta discusión el conocer esa manifestación de los Diputados del Frente Popular por la provincia de Cuenca.

La Comisión de suplicatorios, después de oír a los Diputados del Frente Popular por la provincia de Cuenca y haber estampado su firma en el dictamen que nos ha sido leído, me da suficientes elementos de juicio para creer que dicha Comisión, de una manera noble, como está declarado en el dictamen, no acusa al Sr. Gosálvez de nada, pero estima que hay elementos suficientes para que los Tribunales entren a realizar una depuración. Esto, lo manifestado por los Diputados del Frente Popular por la provincia de Cuenca, es lo que, a mi juicio, constituye el fundamen-

to de más valor del dictamen que se presenta en el día de hoy a la consideración de la Diputación permanente.

Hay, sin embargo, en las manifestaciones del Sr. Jáuregui, mezclados, dos asuntos que me parece conviene separar. Uno de ellos se refiere estrictamente a la concesión del suplicatorio, y otro al Tribunal que ha de juzgar al Sr. Gosálvez. Por las razones que he expuesto anteriormente, nosotros creemos que debe accederse a la concesión del suplicatorio. Ahora bien; entendemos que pudiera haber razones de orden legal, sólidamente fundamentadas, para que al Sr. Gosálvez, como a cualquier otro Diputado para el cual se concediera suplicatorio, le juzgue el Tribunal Supremo. Y en este sentido, nosotros nos pronunciamos de acuerdo con las manifestaciones que, en cierto modo, están contenidas en las que del Sr. Jáuregui hemos oído aquí. Nosotros nos pronunciamos: primero, por la concesión del suplicatorio, y segundo, porque el Sr. Gosálvez, como cualquier otro Diputado en esas condiciones, sea juzgado por el Tribunal Supremo en virtud de la ley del 12, que está vigente, y que, según noticias que tengo, ha de ser reformada por el Gobierno.

El Sr. **COROMINAS**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **COROMINAS**: Muy pocas palabras, simplemente para sostener el criterio de la minoría que aquí represento, en el sentido de que no puede procesarse a un Diputado por la mera acusación de desafección al Régimen. Aquí hemos de juzgar por los elementos que tenemos a la vista, y no, a mi modo de ver, por suposiciones ni por imputaciones vagas que no han llegado a una concreción en ninguno de los elementos que hemos tenido a nuestra disposición. Si a consecuencia de esta audiencia concedida a los Diputados del Frente Popular por la provincia de Cuenca se precisase aquí alguna actuación, se citase un hecho y de este hecho se desprendiera una desafección activa, ¡ah!, entonces nosotros nos pronunciaríamos porque se concediera el suplicatorio; pero basarse en la mera afirmación—porque aquí no hay otra cosa que una mera afirmación—de que un Diputado es desafeccionado al Régimen, es algo que está reñido con la esencia del régimen parlamentario.

El Gobierno de la República ha adquirido ya ciertos compromisos morales al hacerse manifestaciones, no solamente por el Gobierno, sino por el Presidente de las Cortes, respecto a la manera de interpretar este punto de la desafección al Régimen. Ha habido la intervención de la Unión Interparlamentaria y, sosteniendo este punto de vista, el Presidente ha actuado y ha hecho traer aquí el suplicatorio referente a un Diputado regionalista, que, por lo menos, es tan desafeccionado al Régimen, por su significación, como pueda serlo cualquier otro. Pero como no había más que una suposición, como en los antecedentes no se citaba un hecho de desafección activa, esta Diputación permanente ha denegado el suplicatorio, y el Sr. Florensa está en libertad y ha asistido a la última reunión de Cortes.

Creo que hemos de pensar mucho todas estas cosas. Si este señor, ahora o mañana, realiza un acto delictivo de desafección, hay que procesarle o perseguirle, sea o no Diputado. Pero llamo la atención de mis compañeros de Diputación. Aquí ahora nos dicen que ha habido solamente una audiencia concedida al Frente Popular de Cuenca, y que, en virtud de esto, se propone la concesión del suplicatorio, sin que haya la afirmación concreta de un acto de desafección activa; simplemente se afirma que este señor era un independiente, que no formaba parte de ningún grupo u organización del Frente Popular y que ha luchado en las elecciones, como lo han hecho todos, en unión de los elementos que le ha parecido conveniente. Se trata, pues, de una pura desafección, sin ningún acto concreto de desafección activa; siendo peligroso que vayamos a entrar por este camino y que vengamos aquí ahora a rectificar actuaciones bien claras que ha seguido la República.

Desafección al Régimen. Pues bien: que se pruebe, que se diga algo. Que un señor figure en la lista de Sres. Diputados entre los independientes no significa una desafección al Régimen. Eso, a mi juicio, ni es un delito ni cabe discutir que pueda serlo.

Es esto respecto a lo que llamo la atención de mis compañeros en relación con el acuerdo que vamos a tomar. Es un acuerdo gravísimo el hecho de afirmar que la simple desafección ideológica o la posición que se haya tomado en unas elecciones basta para dar lugar a un procesamiento. No; esto no es suficiente.

Además, se dice: "Es que no vamos a condenarle, sino que vamos a permitir al Tribunal que ponga en claro si este señor ha realizado actos de desafección activa." Me parece que no es esto; de ninguna manera podemos entrar en esto. No es que el Tribunal tenga que aclarar; el Tribunal no tiene que aclarar nada; lo que únicamente tendría que aclarar el Tribunal es, habiendo de antemano una acusación concreta, si este hombre ha cometido o no el delito. Pero no he visto en ninguna parte del mundo que se procese o se entable procedimiento alguno por los Tribunales para aclarar si tal o cual sujeto ha podido realizar un acto delictivo. Ha de haber una querrela particular, una acusación pública, una intervención del fiscal, de alguien que acuse, y este alguien no puede decir simplemente: "A ver: coged a este hombre, metedle en la cárcel, y ya veremos luego si ha cometido delito". Ha de haber antes la acusación de delito. Y aquí nos encontramos con que la afirmación hecha es una cosa que, a mi juicio, no podemos declarar, ni decorosa ni legalmente, como bastante para procesar ni a un Diputado ni a otra persona que no lo sea.

El Sr. **PRESIDENTE**: ¿Algún otro Sr. Diputado quiere hacer uso de la palabra?

El Sr. **JAUREGUI**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **JAUREGUI**: Para rectificarme, desde luego, en mis apreciaciones anteriores, porque los razonamientos de los Sres. Diputados que se han opuesto a mi punto de vista no me han convencido.